

NEW LEFT REVIEW 128

SEGUNDA ÉPOCA

MAYO-JUNIO 2021

EDITORIAL

SUSAN WATKINS Cambios de paradigma 7

ARTÍCULOS

GEORGI DERLUGUIAN Una pequeña guerra mundial 28

ANTON JÄGER Regiones rebeldes 55

ESCUELA DE FRANKFURT Teorías de la necesidad 81

WILLIAM DAVIES Políticas del reconocimiento 95

FRANCO MORETTI *Bande à part* 115

KENTA TSUDA Cuestiones sobre el decrecimiento 127

CRÍTICA

DANIEL FINN Iglesia militante 150

J. X. ZHANG Los significados de Tiananmen 161

MICHAEL LIPKIN Domesticar a Hegel 175

WWW.NEWLEFTREVIEW.ES

© New Left Review Ltd., 2000

Licencia Creative Commons

Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)

INSTITUTO
25M
DEMOCRACIA

SUSCRÍBETE

ts
traficantes de sueños



KENTA TSUDA

PREGUNTAS INGENUAS SOBRE EL DECRECIMIENTO

LAS RECIENTES DISCUSIONES sobre estrategia medioambiental, incluyendo las que han aparecido en estas páginas, han tenido la tendencia a polarizarse alrededor de dos posiciones sucintamente resumidas por Robert Pollin como «Decrecimiento versus *Green New Deal*»¹. La oposición presupone un conjunto estable y coherente de premisas por cada lado, aunque algunos autores han planteado dudas sobre la solidez de la premisa del decrecimiento. El economista y ecologista Herman Daly, por ejemplo, aun simpatizando con el proyecto, describe al movimiento que apoya el decrecimiento como un conjunto de eslóganes a la búsqueda de un programa². Es cierto que no hay libros blancos que identifiquen a las instituciones que dirigirían una contracción económica deliberada, ni los cambios legales que implicarían. Sin embargo, pueden proponerse programas a diferentes niveles de análisis. El *Green New Deal* estadounidense, por ejemplo, está

¹ Estas posiciones no agotan las contribuciones a la serie de la *NLR* sobre estrategia medioambiental. Por ejemplo, Sharachchandra Lele se centra en cómo tanto el *Green New Deal* como los planteamientos sobre decrecimiento priorizan la acción sobre el clima a expensas de preocupaciones más urgentes de las sociedades del Sur Global. Nancy Fraser argumenta a favor de un proyecto de transformación social más allá de lo «meramente medioambiental», más amplio que el *Green New Deal* o el decrecimiento. Robert Pollin, «Decrecimiento vs nuevo *New Deal* verde», *NLR* 112, septiembre-octubre de 2018; Sharachchandra Lele, «Medioambiente y bienestar. Una perspectiva desde el Sur global», *NLR* 123, julio-agosto de 2020, p. 56-58; Nancy Fraser, «Los climas del capital», *NLR* 127, marzo-abril de 2021, pp. 102-104, 136-137. Agradezco a Dan Luban y Freya McCaie sus reflexiones sobre un borrador previo de este ensayo, que solamente expresa mis opiniones personales.

² Herman Daly, entrevistado por Benjamin Kunkel, «Ecologías de escala», *NLR* 109, marzo-abril de 2018, pp. 111-113.

actualmente formulado en una resolución de catorce páginas, que prefigura un conjunto de leyes todavía por redactar³. Las propuestas sobre decrecimiento tienden a establecerse a un nivel igualmente general. En un influyente artículo se pide una «justa reducción de la producción y el consumo que aumente el bienestar humano y mejore la situación ecológica a escala local y global, a corto y largo plazo»⁴. Hablando en general, los defensores del decrecimiento parten de la premisa de que la escala de la actividad económica mundial ya supera la capacidad del planeta para sustentarla y piden una contracción gestionada de la vida económica.

Este artículo plantea una serie de preguntas, «ingenuas» en el sentido de que son previas, sobre la teoría del decrecimiento. Los estudios sobre decrecimiento están madurando y su comunidad académica se está consolidando⁵, y las cuestiones que se presentan aquí no pretenden excluir la posibilidad de que, más adelante, sus defensores puedan desarrollar respuestas adecuadas. El objetivo es echar un vistazo de principiante a las categorías centrales del decrecimiento –desacoplamiento, producción material, contracción económica gestionada– y presionar a la teoría sobre cuestiones de coherencia y viabilidad administrativa. El ensayo examina, en primer lugar, cuestiones metodológicas y después cuestiones prácticas, que plantea el decrecimiento antes de pasar a examinar la naturaleza del problema para el que se presenta como solución y la naturaleza de las soluciones alternativas. Sin embargo, para empezar necesitamos examinar algunos de los supuestos que subyacen en los conceptos de «crecimiento» y «consumo».

El crecimiento como tal

Los partidarios del decrecimiento tienden a ignorar la diferencia existente entre el significado coloquial de consumo, entendido como algo similar al discrecional «salir de compras», y su definición económica, esto es, la utilización final de un recurso como un bien o servicio. Este

³ Cámara de Representantes, Resolución 109.7, 7 de febrero de 2019

⁴ Francois Schneider, Giorgos Kallis y Joan Martínez-Alier, «Crisis or Opportunity? Economic Degrowth for Social Equity and Ecological Sustainability», *Journal of Cleaner Production*, vol. 18, núm. 6, 2010, p. 512. En su defensa del decrecimiento, Mark Burton y Peter Somerville admiten que «el cómo puede producirse el decrecimiento es algo que no sabemos», M. Burton y P. Somerville, «Decrecimiento: una defensa», *NLR* 115, enero-febrero de 2019, p. 108-110.

⁵ Martin Weiss y Claudio Cattaneo, «Degrowth: Taking Stock and Reviewing an Emerging Academic Paradigm», *Ecological Economics*, vol. 137, julio de 2017.

último sentido engloba no solo las utilizaciones ostensiblemente superfluas de los recursos que los partidarios del decrecimiento reducirían o prohibirían, sino también otras inequívocamente esenciales: alimentos nutritivos, refugio espacioso, atención médica y cuidados de la infancia⁶. Como norma, la capacidad para aumentar el consumo es algo socialmente deseable, aunque cada ejemplo individual de consumo no lo sea. Algunos aumentos del consumo pueden hacerse posibles por la redistribución de la riqueza existente, pero siempre habrá algo cuyo crecimiento sería, como señala Daly, tanto deseable como posible, y no es probable que la reasignación acabe con ello⁷. Si queremos ilustrar esto con un ejemplo, podemos imaginar que un avance tecnológico produce un «Leviatán», una inteligencia artificial extremadamente igualitaria, la cual, utilizando su asombrosa superinteligencia y su increíble capacidad, unifica el planeta y establece un perfecto igualitarismo. Evitando las distorsiones económicas y los problemas administrativos por medio de su inefable inteligencia artificial, Leviatán distribuye la riqueza neta mundial de 360 billones de dólares entre los 7.800 millones de habitantes del planeta, alrededor de 46.000 dólares por persona, ligeramente por debajo de la riqueza de un adulto medio en Portugal. Leviatán también distribuye los ingresos netos globales asignando a cada persona alrededor de 18.000 dólares anuales, el ingreso medio en algunos países europeos⁸. De ese modo, Leviatán ha conseguido un aceptable nivel de riqueza e ingresos para todos.

¿Apoyaría la población medidas para renunciar a todo crecimiento futuro en favor de mantener estáticamente los niveles de riqueza proporcionados por el Leviatán? Creo que no. Hace falta considerar los beneficios marginales de la riqueza adicional: incluso con un aceptable nivel de vida, el crecimiento puede permitir más prosperidad –un año más de vida saludable, la decisión de tener otro hijo– y un futuro más seguro para los niveles de prosperidad existentes. Permite recursos extra para la investigación y el desarrollo en las fronteras de la investigación

⁶ Como señala Lele, «[...] resulta difícil imaginar cómo una gran población sin recursos en el Sur global puede alcanzar una pizca de desarrollo sin algún aumento en la utilización de recursos materiales para la alimentación, la vivienda (incluyendo cierta protección contra el calor) y el vestido, por no mencionar la educación y los desplazamientos», S. Lele, «Medioambiente y bienestar», cit., p. 46-47.

⁷ H. Daly, «A Further Critique of Growth Economics», *Ecological Economics*, vol. 88, 2013, p. 21.

⁸ Credit Suisse Research Institute, «Global Wealth Databook 2019», p. 2, cuadro 3.1. El PIB global es aproximadamente de 139 billones de dólares: IMF Datamapper, «GDP, Current Prices».

biomédica o de la ciencia en general, así como mayor inversión en la capacidad del Estado y en los procesos de satisfacción de las necesidades. En principio, podría haber un momento en el que todo ser humano estuviera saciado al límite y el crecimiento ya no fuera deseable, pero afirmar que ese momento ha llegado es cerrar los ojos ante la realidad.

En la terminología convencional, el crecimiento económico es una transacción eficiente de Kaldor-Hicks, ya que genera suficientes beneficios como para que los ganadores compensen a los perdedores, haciendo así que potencialmente nadie quede peor y algunos mejor⁹. Esto no hace que el crecimiento del PIB sea necesariamente deseable por dos razones. La primera es que no todos los efectos económicos son descifrables y en consecuencia los datos del PIB pueden tergiversar la realidad económica. Los partidarios del decrecimiento no están solos cuando señalan las deficiencias de semejantes índices. Las fórmulas para establecer los indicadores nacionales han sido determinadas por unas elecciones metodológicas, algunas veces arbitrarias, que hacen que el PIB sea demasiado limitado para capturar toda la actividad económica que es descifrable. Más importante todavía es que las cifras del PIB excluyen necesariamente efectos económicos que son incuantificables, bien sea porque el conocimiento humano no los contabiliza o porque eluden la medida y una clara articulación. Las transacciones están integradas en una red de complejas relaciones socioeconómicas, que pueden ser explotadoras, dañinas y, fundamental para esta discusión, tener efectos ecológicos perjudiciales. Muchas de estas innumerables externalidades –positivas y negativas– no se comprenden, o incluso no se perciben, y por ello no pueden recogerse en el PIB.

La segunda razón es que la deseabilidad del crecimiento es una cuestión política y por ello histórica. La discusión sobre la deseabilidad del crecimiento carece de sentido, si no va unida a la distribución del poder político. La justificación del crecimiento en función del bienestar se basa en que cuanto mayor sea la tarta mejor podrá distribuirse de maneras socialmente deseables. Sin embargo, la división real es claramente política; en última instancia se basa en la coerción. Cuando una oligarquía ofrece una teoría del bienestar como una justificación *ex ante*

⁹ Allan Feldman, «Kaldor-Hicks Compensation», en Peter Newman (ed.), *The New Palgrave Dictionary of Economics and the Law*, Londres, 1998, pp. 417-421; véase también, Gordon Tullock, «Two Kinds of Legal Efficiency», *Hofstra Law Review*, vol. 8, núm. 3, 1980, pp. 663-664.

de la política procrecimiento, deberíamos anticipar una «inconsistencia temporal»: la redistribución de la tarta aumentada puede verse indefinidamente diferida. Sin embargo, si el equilibrio de las fuerzas políticas permite llevar a cabo la redistribución, todo el mundo puede aceptar lo que Kaldor y Hicks consideraban una transacción eficiente. En cierto sentido, ello es la apuesta central del pensamiento revolucionario: el desarrollo capitalista de las fuerzas productivas cumple el criterio de eficiencia de Kaldor-Hicks y por ello es deseable, si se confía en que está madurando un poder futuro que estará disponible para redistribuir esa tarta aumentada. Cualquier declaración categórica —es decir, ahistórica— sobre el impacto social y por ende sobre la deseabilidad del crecimiento implica necesariamente una generalización excesiva. El crecimiento solamente puede evaluarse «al ponerse en práctica».

Por lo general, la teoría del decrecimiento sitúa su crítica de la expansión económica en la crisis medioambiental del siglo XXI. Sin embargo, al mismo tiempo se invocan incidentalmente razones extraecológicas¹⁰. Hasta ahora, los intentos de articular una teoría moral del anticonsumo han servido mayormente para ilustrar las dificultades del proyecto. Por ejemplo, un partidario del decrecimiento como Giorgos Kallis defiende una «cultura de límites», que él deriva de Aristóteles y las ciudades-Estado de la Grecia clásica. Kallis propone una vida colectiva organizada alrededor de una ética «limitativa» de la libertad con la que los seres humanos prosperan en la medida en que disciplinan sus deseos y limitan sus acciones a la satisfacción de necesidades «reales» en oposición a las necesidades ficticias generadas por la arrogancia¹¹. Como perspectiva personal esto parece interesante, quizá convincente, pero el decrecimiento es necesariamente una empresa colectiva: se produce a escala social, probablemente global, o no se produce en absoluto. Por ello, cualquier argumentación sobre el decrecimiento no solo debe justificar las preferencias privadas, sino también las elecciones públicas. Una cosa es elegir vivir en función de una ética limitadora y otra legislar en función de ella. Kallis concibe que su filosofía limitadora es «autónomamente» impuesta por *demos* sobre sí mismo; si esto es una predicción no parece bien encaminada. Incluso si nos mostramos inclinados a aceptar alguna versión de la vida austera que él describe, se verifica un salto cuando proclamamos su aplicabilidad universal y damos la bienvenida a su

¹⁰ Lola Seaton, «Cuestiones verdes», *NLR* 115, enero-febrero de 2019, pp. 117-119.

¹¹ G. Kallis, *Limits: Why Malthus Was Wrong and Why Environmentalists Should Care*, Stanford (CA), 2019.

imposición por parte del Estado. Puede que los partidarios del decrecimiento tengan una teoría moral más persuasiva en la cartera, pero hasta que la hagan pública, una estrategia social basada en la argumentación extraecológica sobre el decrecimiento sería fundamentalmente arbitraria y exigiría un elevado grado de coerción.

Decrecer: ¿qué y cuánto?

La idea de que existe un límite al crecimiento tiene una plausibilidad básica. Los argumentos sobre el decrecimiento a menudo parten de una cierta clase de perspectiva cósmica, invocando el énfasis de los economistas ecologistas en la finitud terrestre. Como señala Daly, «la economía es un subsistema dentro de otro más amplio, la ecosfera, que es finita, no se expande y está materialmente cerrada»¹². Ningún grado de inteligencia, de manipulación empresarial o de inversión gubernamental puede superar las limitaciones de la realidad física, las existencias de materiales accesibles o el flujo de la radiación solar. En algún momento, el crecimiento debe parar. Sin embargo, el horizonte temporal es relevante. Independientemente de cualquier acción antropogénica, el sol se convertirá algún día en un gigante rojo y la Tierra se volverá inhabitable. Estas eventualidades no son relevantes para los actuales propósitos práctico-políticos. Por ello, la responsabilidad descansa sobre los defensores del decrecimiento para que racionalicen el decrecimiento ahora.

La premisa necesaria de la tesis del decrecimiento es que la vida en la Tierra está amenazada por la escala de la actual «producción material», es decir, «del ritmo de extracción de materias primas de la naturaleza y de su devolución en forma de desechos». Desde esta perspectiva, «el crecimiento económico aumenta inevitablemente la producción». Los partidarios del decrecimiento no ven ninguna escapatoria mediante una energía más limpia o gracias a la utilización más eficiente de los recursos, debido a la dinámica que se conoce como el «efecto rebote» o la paradoja de Jevons¹³. En 1865, el economista inglés William Stanley Jevons demostró que, en contra de lo esperado, la eficiencia mejorada de la combustión del carbón tenía por resultado acelerar el agotamiento de sus reservas: la mejora de la eficiencia reducía inicialmente su demanda,

¹² H. Daly, «Ecologías de escala», cit., p. 96-97.

¹³ Véase respectivamente, Joshua Farley, «Steady State Economics»; G. Kallis, «Introduction», Blake Alcott, «Jevons' Paradox (Rebound Effect)», y la contribución de los editores en «From Austerity to Dépense», en Giacomo D'Alisa, Federico Demaria y Giorgos Kallis (eds.), *Degrowth: A Vocabulary for a New Era*, Nueva York, 2014.

se necesitaba menos carbón por cada unidad de trabajo mecánico. Pero debido al resultante cambio de los precios los consumidores respondieron demandando más trabajo mecánico (nuevas máquinas de vapor se volvieron rentables para un abanico más amplio de aplicaciones) y con ello más carbón. Los partidarios del decrecimiento generalizan el efecto rebote de Jevons en el mercado del carbón del siglo XIX para incluir bajo su rúbrica la utilización que la civilización hace de materiales físicos considerados en su totalidad¹⁴. El progreso tecnológico puede hacer que la utilización de los recursos sea más eficiente –se puede generar el mismo trabajo o el mismo consumo partiendo de menos recursos– pero, según los partidarios del decrecimiento, todas las ganancias de eficiencia se ven superadas por la expansión de la escala. Afirman que el efecto rebote a escala macro anula las esperanzas de que los avances tecnológicos reducirán la producción material a un nivel sostenible sin una política de reducción del crecimiento.

El efecto rebote a escala macroeconómica es un axioma de la teoría del decrecimiento, no un hallazgo, y hay razones para dudar de él. Que el efecto rebote sea cierto para una determinada ganancia de eficiencia es una cuestión empírica: aparentemente funcionó en las mejoras de la combustión del carbón que se produjeron en el siglo XIX, al menos durante un tiempo. Sin embargo, no hay ninguna razón para pensar que se aplica necesariamente a todas las situaciones. Las ganancias de eficiencia no producirán un efecto rebote, por ejemplo, cuando generen un sustituto completamente distinto de un producto determinado. El aumento de la utilización de las máquinas propulsadas por petróleo, que eran más eficientes que las de carbón, no produjo ningún efecto rebote sobre el consumo de carbón, por lo menos no mediante los mecanismos que describió Jevons; en vez de ello aumentó la utilización de un

¹⁴ El partidario del decrecimiento Samuel Alexander señala que la paradoja de Jevons «penetra en las sociedades de mercado y más allá». «Ello implica que las mejoras en la tecnología y la eficiencia no van a resolver la crisis ecológica», Samuel Alexander, «Planned Economic Contraction: The Emerging Case for Degrowth», *Environmental Politics*, vol. 21, núm. 3, 2012, p. 356; «Cuanto mayor sea la eficiencia en la utilización de los recursos, menor será su coste y acabaremos utilizando mayores cantidades de ellos. Esto es, en esencia, el crecimiento», G. Kallis *et al.*, «Research on Degrowth», *Annual Review of Environment and Resources*, vol. 43, 2018, p. 296. Teóricos heterodoxos, que por otra parte se muestran críticos con la teoría del decrecimiento, también apoyan esta posición: véase John Bellamy Foster, Brett Clark y Richard York, *The Ecological Rift: Capitalism's War on the Earth*, Nueva York, 2010, p. 179, donde señalan un efecto rebote a escala macro como una característica necesaria del desarrollo tecnológico bajo el capitalismo.

recurso diferente, el petróleo¹⁵. Los partidarios del decrecimiento eluden esto haciendo hincapié en la conmensurabilidad de todos los recursos terrestres, recurriendo al ejemplo anterior del carbón y el petróleo. La «producción material», que engloba todos los recursos y sumideros, es suficientemente amplia como para hacer que la sustitución sea imposible: no se puede sustituir fuera de la realidad física. Pero, ¿es una categoría útil o simplemente un término para marcar una posición?

En abstracto, puede plantearse un metabolismo de la civilización o una función de producción con insumos (recursos naturales) y productos físicos (bienes, servicios, residuos) que ha existido al menos desde el comienzo de la historia humana. En relación con la actualidad, los insumos en 1900 incluían proporcionalmente más caballos, carbón y leña, y menos silicio y menos precursores de la fibra de carbono; en 2100 puede haber muchos menos caballos, menos carbón y más silicio y fibra de carbono, además de otros materiales que apenas se utilizan actualmente. En otras palabras, la composición de este metabolismo o función de producción es muy variable e inestable. ¿Qué unidad utilizan como base los partidarios del decrecimiento para hacer que los dispares insumos y productos sean conmensurables a lo largo de la historia tecnológica humana?

Los partidarios del decrecimiento no especifican una medida fiable de utilización de los recursos para sustentar la «producción material»¹⁶. En la medida en que abordan el problema de la medición, se remiten a índices sustitutivos. Algunos autores analizan la masa de consumo como índice de la producción material; el peso agregado de los materiales físicos consumidos en el tiempo, que es calculado a escala nacional como la demanda de consumo material doméstico. Admiten que la medida es burda como índice de la producción, ya que la masa implicada en una actividad no expresa su impacto ecológico¹⁷. Como índice no consigue registrar los diferentes daños ecológicos de los materiales, por

¹⁵ J. B. Foster *et al.*, *Ecological Rift*, cit., p. 170.

¹⁶ Parece que la unidad ideal debería estar definida en relación al tiempo total de la civilización, por ejemplo, la carga ecológica de un tanque de petróleo sería contabilizada en términos de su agotamiento del tiempo de la civilización. Crear semejante unidad de medida exigiría dos cosas de las que actualmente carece la humanidad: alguna proyección aproximada del curso futuro de la civilización y una comprensión detallada de cómo diferentes fuentes/sumideros interactúan dinámicamente e influyen en esa historia como cambios tecnológicos.

¹⁷ Véase Jason Hickel y Giorgos Kallis, «Is Green Growth Possible?», *New Political Economy*, vol. 25, núm. 4, 2020, p. 3; G. Kallis, *Degrowth: The Economy, Key Ideas*, Newcastle, 2018, p. 109.

ejemplo, el de un montón de ceniza de carbón con restos de mercurio y una masa equivalente de restos de comida en un depósito de compost. Además, está basado en la capacidad de los estadísticos para reflejar todas las fuentes y sumideros incluidos en la actividad antropogénica y en lograr que los efectos sobre ella sean legibles como cantidades; una tarea abrumadora y por lo que yo sé, incompleta. El índice alternativo es el propio crecimiento del PIB, que según Daly es «el mejor índice que tenemos sobre la productividad de los recursos»¹⁸. Pero ello introduce una fatal ambigüedad cuando los partidarios del decrecimiento hacen afirmaciones sobre el «acoplamiento» entre el crecimiento del PIB y la producción: ¿cuál es el índice que están utilizando para esta última? Si se trata de la masa, la relación tiene un fundamento empírico poco fiable. Si el índice es el propio PIB, la afirmación es una tautología.

Además de estos problemas metodológicos de legibilidad, los partidarios del decrecimiento tienen que enfrentarse a cuestiones de magnitud. Defienden una contracción del PIB para ralentizar la producción material, pero abordar formas heterogéneas de perjuicios –por ejemplo la sobrepesca del abadejo en el Golfo de Alaska o la deforestación en el Amazonas– no es probable que exija la misma reducción de la producción. El régimen de decrecimiento necesitaría ser prudente, reduciendo la producción al umbral necesario para salvaguardar los sistemas naturales más sensibles. ¿Cuál es ese umbral y qué reducción del PIB se necesita para alcanzarlo? ¿Cambia la respuesta a estas preguntas en función de cuándo empezamos a decrecer? ¿Cuál es la pendiente de la curva crecimiento-producción en el momento actual?

Las respuestas a estas preguntas son de vital importancia, porque cualquier error de calibración tendrá graves consecuencias. Si el cálculo se queda corto, la humanidad sufre la lucha violenta de la contracción, pero todavía acaba con un planeta Tierra inhabitable y convertido en un páramo. Si se pasa, la Tierra sigue siendo habitable pero con una «pérdida de eficiencia» pagada con un innecesario sufrimiento humano, mayormente de los pobres, y la pérdida de un futuro alternativo de inversión social y avances científicos. En otras palabras, si se acepta el axioma de los partidarios del decrecimiento de que es necesario reducir la producción para salvar la civilización, el grado de la reducción es importante, muy importante.

¹⁸H. Daly, «A Further Critique of Growth Economics», cit., p. 21. «Con independencia de lo que mide el PIB, ello está estrechamente relacionado con el daño medioambiental», G. Kallis, «Introduction», *Degrowth: A Vocabulary for a New Era*, cit., p. 9.

Los partidarios del decrecimiento esperan que un empoderado Estado democrático asumirá los costes sociales de la alimentación, el alojamiento, la educación, la inversión y la innovación, aumentando sus competencias a través de la redistribución, la expropiación de la riqueza privada o mediante la política monetaria. Pero incluso esos esfuerzos exigirían recursos que el Estado no puede sustituir, como el propio aparato coercitivo y el personal que lo constituye. En una economía en contracción, el Estado se encontraría con una disminución de la base imponible, con recursos públicos más mermados y con mayores limitaciones para la financiación pública. Si todo lo demás permaneciera igual, su capacidad para actuar sería menor con cada año de profundización de la contracción. No hay medios políticos para escapar de la importancia de las magnitudes.

Finalmente, aunque la «producción material» pueda ser una fructífera categoría para los experimentos intelectuales, es profundamente errónea como fundamento de políticas medioambientales eficaces. La producción no es una magnitud directamente accesible y los índices disponibles parecen tan inadecuados que hacen que un tratamiento empírico coherente sea imposible. La teoría del decrecimiento carece de solidez en cuestiones de magnitud, tanto en lo referido a los umbrales de producción como en lo que atañe a los objetivos del decrecimiento. En estas circunstancias, aunque sus partidarios sean libres para elaborar los conceptos, otros podrían responder con el adagio latino, *quod gratis asseritur, gratis negatur*: lo que se afirma libremente –sin una base que lo sustente– puede ser libremente negado.

¿Implementación?

Pero dejemos de lado las dificultades metodológicas y sigamos con el experimento mental. Imaginemos que un régimen de decrecimiento ha desarrollado los medios para medir con exactitud la producción material y modelado de forma fiable su relación con el PIB. Igualmente, ha establecido un objetivo de producción bien definido y ha calculado la reducción necesaria del PIB para alcanzarlo. Ahora el régimen necesita poner en práctica el plan. ¿Qué supone la administración de una contracción económica planeada?

Para mitigar el sufrimiento, los partidarios del decrecimiento insisten de manera general en una política de contracción «controlada» o «gestionada». Con una contracción económica cuidadosamente planificada,

el régimen del decrecimiento coordinaría las soluciones públicas para el desempleo, la falta de vivienda, el hambre y otras privaciones, mientras la sociedad cambia hacia el nivel óptimo de producción material. Una parte fundamental del plan sería una política industrial de discriminación sectorial o quizá interempresarial. Las empresas socialmente beneficiosas (y por ello medioambientalmente tolerables) podrían expandirse, mientras que las perjudiciales podrían encaminarse hacia el cierre directo. El resultado serían bolsas localizadas de crecimiento –que proporcionarían empleos, ingresos fiscales e innovaciones– dentro de una economía agregada en contracción. Sin ninguna propuesta administrativa clara por parte de los partidarios del decrecimiento para seguir adelante, imaginemos que el régimen podría utilizar la legislación fiscal: empezar con una presunción impugnabile del daño e imponer multas si una empresa informa de un crecimiento neto. Las empresas que puedan probar su contribución al interés público podrían optar a licencias de crecimiento o a la exención de multas fiscales. Alternativamente, el régimen podría autorizar a un organismo gubernamental para que identificara empresas socialmente indeseables y ponerlas en algo parecido a una administración judicial para proceder a su cierre ordenado.

Para impedir que las empresas socavaran la política general de decrecimiento, el régimen tendría que estudiar todas las empresas importantes. Cada una de ellas tendría que ser clasificada como empresa que actúa en beneficio del interés público y por ello susceptible de mantener su funcionamiento como siempre, o como una empresa socialmente indeseable y por ello encaminada a su cierre. Algunas candidatas al cierre son fáciles de identificar; los partidarios del decrecimiento hablan de las que generan energía a partir del carbón. Igualmente, hay evidentes candidatos para un crecimiento localizado: la tecnología médica innovadora, las nuevas fuentes de energía, los servicios de limpieza de residuos tóxicos, quizá la propia investigación del decrecimiento. Otros casos serían más complejos. Por ejemplo, Mark Burton y Peter Somerville sugieren que la producción de acero y cemento para la industria de la construcción podría desaparecer¹⁹; pero una política de desmantelamiento en este ámbito podría encontrar la resistencia de organizaciones en pro de la construcción de viviendas para personas de rentas bajas y por parte de trabajadores para quienes las viviendas más ecológicas están fuera de su alcance. Estos ajustes serían comunes al tener que clasificar tantas industrias y empresas. En el proceso, los funcionarios cometerán errores, poniendo fin a empresas beneficiosas o cuidando otras que son destructivas.

¹⁹ M. Burton y P. Somerville, «Decrecimiento: una defensa», cit., p. 108-110.

Los partidarios del decrecimiento afirman que una actividad económica deseable puede definirse como una actividad que satisfaga necesidades humanas²⁰. Sostienen que, ya que las necesidades son finitas, la actividad económica que se requiere para satisfacerlas también lo es. La tarea del gobierno es fomentar estas actividades y eliminar las superfluas. Los partidarios del decrecimiento no proporcionan, sin embargo, ninguna lista concluyente de las necesidades humanas, probablemente porque no es posible elaborar semejante relación. La necesidad no es una categoría independiente, depende de otras condiciones de desarrollo ético o social. Algunas de ellas, bajo esa u otra etiqueta, son incontrovertibles. Todo el mundo puede estar de acuerdo en que un ser humano debería tener alimento, refugio, asistencia sanitaria, una educación básica y que debería poder asociarse con otros seres humanos amistosos, lo cual puede ampliarse reconociendo la libertad de conciencia, la capacidad para expresarse, la privacidad o una cualificada libertad de expresión. Pero una teoría basada en las necesidades no contribuye demasiado al trabajo de definir estos derechos y en la práctica cualquier teoría política universalista está de acuerdo con ellos.

Una teoría demuestra su valor al trazar sus límites y aquí es donde la teoría de las necesidades de los partidarios del decrecimiento se queda corta. Por cada desacuerdo sobre el crecimiento justificado por la satisfacción de una necesidad, tendríamos una cascada de desacuerdos sobre los límites de la categoría «necesidad». Un partidario del decrecimiento, por ejemplo, sugiere que el Estado organice la «convivencia» en forma de fiestas y espacios públicos para la filosofía, presumiblemente racionalizados como toda la provisión social como satisfacción de necesidades²¹. Pero el autor de este artículo negaría la universalidad de la «necesidad de convivencia» así definida y tomaría medidas para evitar la socialización y el adoctrinamiento de grandes grupos. La necesidad de unos es la tarea de otros. Algunos teóricos proponen resolver el problema de la indeterminación clasificando las necesidades a un elevado nivel de generalidad, por ejemplo, limitando las necesidades básicas a la supervivencia física, salud y autonomía personal, porque estas necesidades deben satisfacerse antes de que los actores puedan alcanzar «cualquier otro objetivo

²⁰ G. Kallis, *Limits: Why Malthus Was Wrong*, cit., *passim*; M. Burton y P. Somerville, «Decrecimiento: una defensa», cit., p. 106-108.

²¹ G. Kallis, *Limits: Why Malthus Was Wrong*, cit., p. 116; Kallis parte de las contribuciones del investigador Aaron Vansintjan. G. Kallis, «Introduction», *Degrowth: A Vocabulary for a New Era*, cit., p. 11.

de valor»²². Pero esta formulación también es susceptible de ser tachada de «vacía por vaguedad» como dicen los abogados e incluso estos teóricos admiten que lo que supone la salud y la autonomía es discutible e indeterminado²³. Una política de decrecimiento no puede partir lógicamente de una categoría estable de necesidades, porque semejante categoría no existe.

El argumento procedimental de los partidarios del decrecimiento no es más sólido. Insisten en que una contracción gestionada de la economía será administrada democráticamente, con el *demos* imponiéndose a sí mismo los límites al consumo. Cualquiera que haya abierto un libro sobre teoría política se dará cuenta del carácter incompleto de estas declaraciones. ¿Qué acuerdos democráticos prevén los partidarios del decrecimiento y cómo los alcanzarían? ¿Qué instituciones ofrecerán políticas de interés público? ¿Jurados administrativos? ¿La democracia plebiscitaria? ¿El centralismo democrático? En ausencia de mención alguna de las instituciones, la invocación a la democracia suena vacía. En resumen, los partidarios del decrecimiento fracasan a la hora de describir cómo administrarán la gestión de la contracción económica. El proceso podría ser complicado.

La política nacional es solamente el comienzo. Los partidarios del decrecimiento no abordan directamente el tema de la coordinación internacional, pero presumiblemente todas las grandes economías necesitarían contraerse para alcanzar las requeridas reducciones de la producción material. El decrecimiento en un solo país no sirve para nada. Sin embargo, la coordinación internacional del decrecimiento amenaza con reproducir el problema de la coordinación a escala nacional en el seno de las anárquicas dinámicas de la política interestatal, donde la magnitud económica viene armada con el poder militar. Parece probable que cada Estado apuntará a maximizar su posición relativa en un mundo en decrecimiento, es decir, decrecer lo menos posible respecto a otras naciones. Reconociendo este problema, los Estados más poderosos pretenderán establecer un acuerdo internacional –un Pacto Global de Decrecimiento– que fije las limitaciones. El Pacto incluiría

²² Ian Gough, «Climate Change and Sustainable Welfare: The Centrality of Human Needs», Cambridge, *Journal of Economics*, vol. 39, núm. 5, septiembre de 2015, p. 1197.

²³ «Desde luego definir la salud y la enfermedad no es fácil. Algunos afirman que las concepciones de la salud son siempre internas a un sistema cultural de pensamiento y por ello inherentemente discutibles», I. Gough, «Climate Change and Sustainable Welfare», cit., p. 1197.

mecanismos para controlar y penalizar la defección y sus miembros establecerían parámetros útiles para medir la contracción registrada en cada país. Cuando las estadísticas nacionales no cumplieran el plan de decrecimiento, llegarían las penalizaciones; por ejemplo, sanciones económicas progresivas.

Esto en cuanto al Pacto en teoría, pero, ¿qué pasa con la práctica? El Pacto necesitaría definir los criterios de decrecimiento que se aplicarían a unas economías muy diversas, mientras cada gobierno querría libertad para definir esos criterios por sí mismo. La mayoría, sin duda, sostendría que su proporción de decrecimiento debería reducirse, invocando el principio del decrecimiento del «crecimiento localizado en interés de la ciudadanía» u otras circunstancias nacionales específicas. En ausencia de un criterio definido en función del interés público, sería difícil impugnar las pretensiones de cada gobierno. Es probable que el grado de contracción exigido a cada nación acabe siendo una cuestión arbitraria, acomodada a la voluntad de los poderosos en vez de implementada para facilitar el logro de los objetivos ecológicos.

La aplicación del Pacto sería un trabajo continuo: los Estados distorsionan rutinariamente los indicadores macroeconómicos nacionales, pero con el Pacto los incentivos para hacerlo se multiplicarían. Los ministerios podrían enviar a prometedores funcionarios subalternos a prestigiosas universidades para que perfeccionaran su destreza en maquillar las cuentas. Los gobiernos desplegarían estos expertos tanto para ocultar sus propias cifras como para examinar las de otras naciones. El Pacto también podría encontrarse con otro problema, endémico a la coordinación de grupos: la defección. Aunque los partidarios del decrecimiento esperan que se produzca una sustancial redistribución internacional, esa previsión podría quedarse corta dejando a los países más pobres con una base imponible todavía más reducida para aliviar el desempleo, la falta de viviendas, las enfermedades y el hambre. Sus angustiadas poblaciones podrían recurrir a la revolución. Como respuesta a las demandas populares, el nuevo gobierno modificaría los compromisos de decrecimiento del *ancien régime* o incluso repudiaría el pacto en su conjunto. Los principales miembros del Pacto podrían ignorar la retirada de un micro Estado, pero es poco probable que toleraran la defección de una gran potencia. La respuesta de la comunidad internacional partidaria del decrecimiento sería rápida y furiosa: un decrecimiento punitivo exógenamente impuesto.

El clima primero

Estas hipótesis simplemente muestran que una política global de decrecimiento exigiría significativos recursos para administrarla y que incluso teniéndolos podría caerse en una espiral de mala gestión burocrática y conflicto internacional. Pero dejando de lado las cuestiones metodológicas, incluso los problemas administrativos del decrecimiento, nacionales e internacionales, no descalifican esta política si la estrategia es absolutamente esencial para la supervivencia de la civilización. ¿Es así?

Los defensores consideran axiomático que el decrecimiento es necesario para que la actividad humana permanezca dentro de la capacidad de sustentación de la Tierra o de las «fronteras del planeta». Con ello se refieren normalmente a los límites para cada uno de los nueve procesos del sistema-tierra establecidos por Johan Rockström y Mattias Klum, más allá de los cuales hay un riesgo elevado de que el planeta bascule desde las condiciones estables del Holoceno de los últimos 10.000 años hacia un estado biofísico que pueda no soportar a las sociedades humanas modernas. Donde sea posible, Rockström y Klum sugieren parámetros específicos para los límites y estatus actual de cada proceso del sistema-tierra: cambio climático, integridad de la biosfera (es decir, extinciones), disminución del ozono en la estratosfera, acidificación de los océanos, contaminación con nitrógeno y fósforo, superficie forestal, uso del agua dulce, carga de aerosoles atmosféricos y «nuevas entidades» todavía por definir²⁴.

Según Rockström y Klum, la actividad humana todavía no está presionando contra la totalidad de las nueve fronteras. Dos de los procesos –las extinciones y la contaminación por fósforo/nitrógeno– están en zona alta de riesgo, más allá de los límites seguros de las «fronteras del planeta». El cambio climático y la deforestación están en una etapa de creciente riesgo, presionando sus fronteras²⁵. De los cinco sistemas

²⁴ Johan Rockström y Mattias Klum, *Big World, Small Planet*, New Haven (CT), 2014, pp. 59-79.

²⁵ En cuanto al cambio climático, Rockström y Klum ofrecieron en 2014 una cuantificación de 396,5 ppm de CO₂ en la atmósfera respecto a los límites para el planeta situados en 350-450 ppm; adoptan una posición más dura que el IPCC (Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático), que establece 430 ppm como el nivel para un aumento de la temperatura de menos de 1,5 grados en relación a los niveles preindustriales. La deforestación actual conserva el 62 por 100 de la cubierta vegetal respecto a una frontera planetaria del 54-75 por 100. Véase J. Rockström y M. Klum, *Big World, Small Planet*, cit., pp. 67-69.

restantes, cuatro todavía no han transgredido sus fronteras planetarias y uno está por definir. Se pueden hacer críticas justificadas de esta metodología. Se puede cuestionar el valor de algunas de las medidas de las «medias globales», ya que no está claro que Rockström y Klum estén abordando los sistemas existentes como bienes comunes globales²⁶. No obstante, lo que hay que señalar es la relevancia de las estrategias de decrecimiento para estos procesos del sistema-tierra. Los partidarios del decrecimiento normalmente dan a entender que sus prescripciones protegerían a todos. Sin embargo, la única frontera planetaria que abordan expresamente es la capacidad de la atmósfera para actuar como sumidero de los gases de efecto invernadero. Su proposición es que, comparada con todas las estrategias alternativas, la civilización humana solo puede evitar un catastrófico cambio climático antropogénico mediante el decrecimiento. En otras palabras, la racionalidad ecológica del decrecimiento se reduce a la acción necesaria contra el cambio climático.

Si aceptamos la urgencia del cambio climático como la cuestión medioambiental más acuciante, merece la pena preguntar en primer lugar cuál sería la manera más rápida y práctica de abordarlo mediante la utilización de las herramientas que tenemos a mano y del conocimiento disponible. Y, en segundo lugar, la cuestión política: ¿cuáles son los obstáculos para implementar ese programa mínimo? Por lo que respecta a las herramientas, un régimen de constricciones legales que implícitamente limita el crecimiento sin excluirlo quizá sea tan familiar que no llama la atención. Los derechos políticos y civiles en los regímenes liberales ya establecen limitaciones sobre la actividad social, incluyendo transacciones que colectivamente generan crecimiento económico. En algunas jurisdicciones, los derechos llegan a la esfera medioambiental, a menudo definida por su estatus en vez de por su constitución. Por ejemplo, en la legislación estadounidense, las leyes aprobadas a principios de la década de 1970 proporcionan a los individuos derechos contra el

²⁶ Por ejemplo, la disponibilidad de agua potable es un fenómeno localizado. Ahorrar agua en Juneau, Alaska, en un gran bosque templado y lluvioso puede no tener un impacto directo sobre la disponibilidad de agua en un pueblo del norte de la India, que sufre devastadores agotamientos de las aguas subterráneas. Podría haber conexiones indirectas entre los dos –por ejemplo, los cambios relativos en los precios del agua podrían propagarse desde Juneau por toda la economía mundial–, pero los «bienes comunes» en cuestión no son una fuente compartida de agua dulce. Promediar los índices sostenibles de uso del agua o definir un umbral global de uso del agua dulce que equilibre las diferencias entre ellos es prácticamente inútil. Una crítica similar se encuentra en David Molden, «Planetary Boundaries: The Devil is in the Detail», *Nature Climate Change*, vol. 1, 2009, pp. 116-117.

daño producido por determinadas formas de contaminación del agua y del aire, e incluso contra los daños que puedan sufrir por las actuaciones contra especies amenazadas. En realidad, los regímenes de derechos existentes están severamente limitados tanto en términos de su alcance *de jure* como de su realización práctica. Pero estos ejemplos demuestran que puede imaginarse un régimen legal de limitaciones ecológicas para controlar las emisiones y, a diferencia de los acuerdos por definir sobre un régimen de decrecimiento, tienen el valor de que realmente existen.

En cuanto a un programa mínimo de acción climática, muchos ecologistas estarían de acuerdo en que los principales Estados emisores de gases a la atmósfera necesitarían adoptar las siguientes medidas:

1. Imponer la reducción de emisiones, que prevería una disminución gradual de la utilización generalizada de combustibles fósiles y otras importantes fuentes de emisión de gases de efecto invernadero mediante alguna combinación de la atribución de un precio a las emisiones –por ejemplo un impuesto sobre el carbono– y de regulación directa: estándares de emisión y eficiencia más estrictos, moratoria en la utilización extractiva de tierras públicas. Las consideraciones político-económicas sugieren que, al margen de la eficiencia, la combinación de estas políticas descansaría en última instancia en un conjunto de leyes de descarbonización específicas para cada sector, es decir, en una política industrial²⁷.
2. Eliminación de las existencias en la atmósfera de las emisiones heredadas, por ejemplo mediante la expansión a gran escala de la conservación de las tierras públicas, leyes de conservación del suelo e inversión e innovación en la captura de los gases.
3. Una política redistributiva para, al menos, compensar las dislocaciones producidas por los esfuerzos para reducir las emisiones.
4. Coordinación internacional. En las actuales circunstancias, esto probablemente tomaría la forma de tratados que vincularían la política comercial con la reducción de emisiones, eliminando la posibilidad de arbitraje sobre la acción climática. A tenor de estos tratados, es probable que la redistribución internacional desde las sociedades industrializadas ricas hacia el Sur Global se produjera de modo

²⁷Danny Cullenward y David Victor, *Making Climate Policy Work*, Cambridge, 2020.

inadecuado. Aunque funcionara de modo muy imperfecto, ello sería preferible a la otra alternativa realista: la reducción de emisiones bajo la bota imperial mediante la manipulación del sistema SWIFT, las sanciones económicas y la intervención militar²⁸.

Junto a un aumento de la inversión pública en la investigación científica básica, estos serían los elementos de un programa mínimo sobre el clima. Son elementos necesarios, pero potencialmente insuficientes (por ejemplo, si se adoptan demasiado tarde). Son actuaciones contra el cambio climático que están al alcance de la mano.

Las prescripciones sobre el decrecimiento no tienen ninguna relación necesaria con la acción contra el cambio climático. Sin duda hay una posibilidad real de recesión como resultado de la descarbonización antes de que pudiera surgir un nuevo equilibrio, pero añadir también prescripciones sobre decrecimiento sería cortejar al desastre económico. Las consideraciones sobre el igualitarismo o la solidaridad social no necesitan militar contra un programa mínimo de acción contra el cambio climático. «Los impuestos sobre el carbono no son socialistas» necesariamente²⁹. Tampoco existe una relación ineluctable entre la conservación de la tierra y la justicia distributiva. Pero una acción mínima contra el cambio climático es una opción mejor para un programa de transformación social que el trauma recesionario del decrecimiento.

Como sugieren los proponentes del *Green New Deal* en Estados Unidos, la acción contra el cambio climático puede integrarse dentro de una política social transformadora. Realmente, la propuesta del *Green New Deal* puede ser al mismo tiempo demasiado poco ambiciosa y administrativamente mostrar un exceso de confianza. El *Green New Deal* se centra en compensar los costes sociales previstos de la acción contra el cambio climático³⁰. Sin embargo, en la sociedad estadounidense la necesidad de profundizar la redistribución va mucho más allá del imperativo de compensar por

²⁸ Señalando el destino de sucesivas conversaciones sobre el clima en la ONU, Lola Seaton sostiene que un componente esencial de una estrategia verde viable es un organismo intergubernamental global con auténticas capacidades legislativas y poderes prácticos de implementación; una debilidad de muchas propuestas medioambientales es que asumen que existe semejante agente o que podría crearse fácilmente, L. Seaton, «Cuestiones verdes», cit., p. 133-134.

²⁹ Scott Edwards, «No, Carbon Taxes Are Not Socialist», *Jacobin*, 10 de octubre de 2010.

³⁰ Véase por ejemplo, R. Pollin, «Decrecimiento vs nuevo *New Deal* verde», cit.

la descarbonización. Para hacer que la redistribución sea más eficiente, la política social debería tomar la forma más amplia y universal posible en vez de optar por modificar leyes dispares con medidas específicas³¹. Ello se aplica igualmente a la política social en una sociedad en proceso de descarbonización: el mejor planteamiento es ampliar los beneficios públicos en virtud de algún criterio general –tablas de tipos impositivos en la legislación tributaria– u optar por un beneficio universal similar a la sanidad socializada. En otras palabras, hay razones de eficiencia para disociar la política social de la protección medioambiental.

El *Green New Deal* asume que los legisladores –o los burócratas a los que los legisladores trasladarían las concreciones de las políticas aplicables– serán capaces de anticipar las consecuencias de la descarbonización y diseñar cambios redistributivos compensadores apropiados, monetarios o en especie. Hay pocas razones para creer que ese tipo de previsión pueda acertar y conviene no olvidar que los fallos de predicción podrían ser devastadores para las grandes mayorías. A diferencia de los amplios programas universales, estos complementos redistributivos fragmentados a la protección medioambiental probablemente se arriesguen a distorsionar la acción contra el cambio climático al margen de su impacto ecológico: cada complemento redistributivo exigirá una u otra dosis de «amiguismo» para sobornar a los legisladores que se muestren contrarios, dilapidando recursos que de otro modo estarían disponibles para profundizar el impacto ecológico.

¿Repolitización?

Aunque la acción contra el cambio climático podría formar parte de un número indefinido de potenciales cambios sociales de envergadura –transición al socialismo, ascenso de una tecnocracia partidaria del decrecimiento, un catolicismo integrista triunfante– en sí misma no requiere un cambio totalizador de régimen. Su versión mínima debería ser en principio posible bajo cualquier régimen capitalista racional. Además, podría esperarse que cualquier régimen semejante tomara este camino. El factor político más importante para la configuración de toda estrategia verde es que el actual régimen capitalista realmente existente ha rechazado esta evidente –y hasta hace treinta años relativamente poco onerosa– acción contra el cambio climático. ¿Qué explicación

³¹ Louis Kaplow y Steven Shavell, «Why the Legal System Is Less Efficient than the Income Tax in Redistributing Income», *Journal of Legal Studies*, vol. 23, núm. 2, 1994.

ofrecen los partidarios del decrecimiento de este hecho? En opinión de sus partidarios, el decrecimiento plantea explícitamente «repolitizar el ecologismo»³². Sin embargo, tal y como es, el análisis político de los partidarios del decrecimiento es ideacional, obsesionado por entendimientos colectivos: el «consenso del desarrollo» o el «imaginario del crecimiento». De hecho, los partidarios del decrecimiento raramente analizan el poder político o a aquellos que lo sustentan. Escribiendo en imperativo, sus prescripciones nos urgen a «nosotros» a emprender modos de vida más sabios y responsables. Pero esto plantea el puzle del *statu quo*: ¿quién impone la crisis climática sobre quién?

Hay poco misterio en cuanto al «sobre quién». Los jóvenes –las generaciones Z (1995-2010) y Alfa (2011-2025)– entrarán en la edad adulta cuando se intensifica el cambio climático y el caos político correspondiente. Las consecuencias –hambrunas, enfermedades, desplazamientos, levantamientos y violencia política– caerán desproporcionadamente sobre los pobres y el Sur Global. A esto hay que añadir los costes de oportunidad negativos. La demora irracional para mitigar la crisis climática ya ha privado a la humanidad futura de recursos que de otra manera hubieran estado a su disposición. La propia «humanidad futura» es una categoría modelada por la crisis: llevándose incontables vidas y destruyendo la riqueza social, el cambio climático privará a la humanidad de todo el conocimiento y experiencia que hubieran fructificado en un universo alternativo donde se hubieran tomado medidas en el momento adecuado.

¿Qué pasa con el «quién», con los agentes de este desorden? En marzo de 1982, el científico de la NASA, James Hansen manifestó ante la Cámara de Representantes estadounidense que durante las próximas décadas era probable que se produjera un «sustancial cambio climático, si el ser humano continúa modificando la composición de la atmósfera a los ritmos actuales». Los modelos climáticos indicaban «un gran impacto climático por el aumento del dióxido de carbono y los gases residuales»³³. Es posible que el gobierno federal conociera antes el efecto de los gases invernadero –las grandes empresas del petróleo han sido conscientes de él por lo menos desde finales de la década de 1960–, pero el testimonio de Hansen puede utilizarse como un cálculo conservador de cuándo Washington fue informado de la crisis climática. Un programa mínimo

³² G. Kallis, «Introduction», *Degrowth: A Vocabulary for a New Era*, cit., pp. 8, 9.

³³ US House of Representatives Committee on Science and Technology, «Carbon Dioxide and Climate, The Greenhouse Effect», núm. 115, 25 de marzo de 1982, p. 40.

de acción contra el cambio climático ya era concebible: funcionarios del gobierno de Nixon habían propuesto la pigouviana idea general de los «cánones sobre residuos» y el ingeniero del MIT, David Wilson, se dirigió a los legisladores proponiendo específicamente un impuesto para limitar las emisiones de CO₂ ya en 1974.³⁴

Con la excepción de un número reducido de cambios introducidos en determinadas políticas al final del mandato de Obama —rápidamente revocados por el gobierno de Trump— la Administración federal estadounidense se ha movido sistemáticamente en la dirección contraria. Desde 1990, Estados Unidos ha emitido gases de efecto invernadero equivalentes a más de 200 millardos de toneladas de CO₂. El papel del propio gobierno federal como una fuente directa de emisiones es considerable. Los militares estadounidenses utilizan más petróleo que cualquier otra institución mundial: entre 2001 y 2017, emitieron 1,2 millardos de toneladas de dióxido de carbono³⁵. A diferencia de las emisiones de fuentes frecuentemente criticadas como las camionetas *pickup* o la industria cárnica, las emisiones militares son el epítome de las actividades improductivas de «utilidad negativa», derrochando billones de dólares de los contribuyentes en devastar (en muchos casos, poniendo un fin violento) las vidas de innumerables civiles de quienes los estadounidenses de a pie no tienen ninguna queja.

El agravamiento de la crisis climática por el Estado queda subrayado por el control de este ámbito de las políticas por parte de las corporaciones del sector de los combustibles fósiles y su asociación comercial, el American Petroleum Institute. Las seis grandes compañías petroleras se han beneficiado de miles de millones de dólares facilitados anualmente por el gobierno federal en forma de subsidios directos. Sin embargo, estas cantidades quedan eclipsadas por un subsidio oculto que toma la forma de lo que el gobierno *no* hace: su postergación de la acción contra el cambio climático supone, según un documento reciente del FMI, un subsidio de 649 millardos de dólares concedido a las compañías petroleras por el gobierno estadounidense cada año, lo cual le coloca en segunda posición tras los subsidios concedidos por el gobierno chino a las mismas, que alcanzan los 1,4 billones de dólares³⁶. En 2020, las empresas petroleras y

³⁴ Chris Berdik, «The Unsung Investor of the Carbon Tax», *Boston Globe*, 10 de agosto de 2014.

³⁵ Neta Crawford, «Pentagon Fuel Use, Climate Change and the Costs of War», Brown University, Costs of War Project, 12 de junio de 2019.

³⁶ David Coady *et al.*, «Global Fossil Fuel Subsidies Remain Large: An Update Based on Country-Level Estimates», IMF Working Paper 19/89, mayo de 2019, Appendix

gasísticas gastaron más de 200 millones de dólares en donaciones electorales y cabildeo federal para presionar al gobierno estadounidense. Este dominio y subversión del poder del Estado no es una materialización del ideal del *laissez-faire*: es corporativismo, la interpenetración del Estado y el gran capital.

Muchos intereses poderosos van a perder con el caos climático, que ya ha llegado a Estados Unidos en forma de tormentas, incendios e inundaciones sin precedentes. ¿Por qué el mundo empresarial estadounidense ha permitido que las grandes empresas de los hidrocarburos socaven durante tanto tiempo la política del Estado contra el cambio climático? Sin duda la llamada lógica de la acción colectiva de Mancur Olson funciona en este caso: unos intereses concentrados –las empresas de combustibles fósiles– encuentran menos obstáculos para organizar y cooptar las correspondientes capacidades instrumentales del Estado que las difusas mayorías de la ciudadanía o del mundo empresarial en general.

Pero para entender la situación también necesitamos situarla en su contexto histórico. La reacción contemporánea contra las medidas de protección medioambiental en Estados Unidos se remonta a finales de la década de 1970, cuando el Congreso se opuso a la legislación medioambiental propuesta por el gobierno de Carter en el contexto de la crisis internacional del petróleo y comenzaron a aparecer ataques contra el ecologismo en los medios impresos. De acuerdo con el análisis de Philip Shabecoff, la presidencia de Reagan, especialmente su primer mandato, «fue percibida por los dirigentes empresariales como una oportunidad para pasar a la ofensiva». Reagan introdujo en la burocracia medioambiental a empresarios e ideólogos proempresariales. Por ejemplo, Anne Gorsuch –su hijo, Neil Gorsuch, ha sido recientemente confirmado por Trump como miembro del Tribunal Supremo– fue puesta al frente de la Agencia de Protección Medioambiental, gracias a la recomendación del industrial Joseph Coors, junto con un ejecutivo de Aerojet perteneciente a su departamento de relaciones públicas y abogados en nómina de Exxon y General Motors, además del propio Coors. Los nombramientos de Reagan consiguieron debilitar las agencias medioambientales y frenaron la enérgica protección medioambiental federal de finales de la década de 1960³⁷.

5. Los subsidios directos del gobierno estadounidense a las compañías petroleras se calculan en torno a los 4,9 millardos de dólares anuales: Joseph Aldy, «Money for Nothing: The Case for Eliminating US Fossil Fuel Subsidies», *Resources*, núm. 184, 2014, pp. 35-36.

³⁷ Philip Shabecoff, *A Fierce Green Fire: The American Environmental Movement*, Washington DC, 1993, pp. 226, 210-211. Shabecoff señala que «fueron muchos quienes pensaron que el repliegue de Carter en innumerables frentes, incluyendo

También en otros ámbitos, el periodo que empezó en la década de 1970 –descrito de varias formas como «la larga recesión» o «el gran estancamiento»– se ha caracterizado por el giro de las grandes empresas hacia la política y la búsqueda de rentas con el fin de evitar un futuro en el que de otra manera podrían haber sido eliminadas como no competitivas. La Sagebrush Rebellion acontecida durante el mandato de Reagan, la consciente confusión sobre el cambio climático orquestada por las grandes compañías petroleras y otros frentes de retroceso medioambiental se ajustan a este modelo. La crisis climática puede comprenderse como el peaje social impuesto por las grandes compañías petroleras mediante su recurso a medios políticos para perpetuar su libre acceso a los cielos como sumidero de la contaminación. En este proceso han contado con la complicidad del resto del gran capital, cumpliendo así un acuerdo tácito de que un sector de las grandes empresas estadounidenses no se movilizará en contra de otro, manteniendo cada uno con seguridad su lugar en el comedero gubernamental.

Si esta hipótesis es correcta, los partidarios del decrecimiento la entienden al revés: el carácter específico de la crisis medioambiental y del cambio climático surge no del dinamismo económico fuera de control, sino de su opuesto: la política del estancamiento. Si los partidarios del decrecimiento hablan de una enloquecida expansión económica, uno busca en vano evidencias en los datos de ese galopante dinamismo y esa cornucopia excesiva. Puede ser que la teoría del decrecimiento sea otro caso de sobreestimación de un diagnóstico equivocado, análogo al hiperbólico discurso de la automatización que ha criticado Aaron Benanav³⁸. Si esto es correcto, la lucha para evitar la catástrofe ecológica y un daño irreparable para el futuro de la civilización humana no surge de diferencias sustantivas sobre el paquete de medidas paliativas, sino que forma parte de una crisis política generalizada que trasciende el ámbito ecológico. Desde luego habrá disputas sobre los detalles de la acción contra el cambio climático, igual que con cualquier política pública de largo alcance, pero sus contornos generales son indiscutibles. Las grandes cuestiones se encuentran solamente en el ámbito de la política: ¿cómo reemplazará la humanidad a los que ejercen el poder político, desplazando a las fuerzas que llevan hacia la destrucción de la civilización?

regulaciones más severas sobre la contaminación del aire, señaló el principio del fin de la era del activismo medioambiental que lanzó el Día de la Tierra», *ibid.*, p. 203.

³⁸ Véase, Aaron Benanav, «La automatización y el futuro del trabajo - I», *NLR* 119, noviembre-diciembre de 2019.